

La Araucanía y el desafío de transformar diagnósticos en política de Estado

Columna

Dr. Pablo Müller Ferrés,
director del
Magister en
Desarrollo
Económico,
Social y Políti-
cas Públicas
U. Autónoma
de Chile, sede
Temuco.



La Araucanía se ha convertido, probablemente, en el desafío territorial más persistente de la política pública chilena en las últimas décadas. En ese contexto, cada cambio de gobierno abre no solo expectativas políticas, sino también la oportunidad –y la responsabilidad– de replantear con mayor realismo las estrategias de desarrollo para la región.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. La región mantiene la mayor pobreza por ingresos del país, cercana al 28,6%, más del doble que regiones como Magallanes, donde el indicador bordea el 10%. En el mercado laboral la situación tampoco es alen-

tadora: la tasa de desempleo regional suele ubicarse entre 9% y 10%, por sobre el promedio nacional y con mayores niveles de informalidad.

A este escenario se suma la persistencia de actos terroristas en la Macrozona Sur. Informes de seguridad indican que desde 2021 se han registrado más de 1.000 atentados y hechos de violencia. Más allá de las discusiones jurídicas sobre su tipificación, el impacto económico es evidente: menor inversión, incertidumbre productiva y deterioro de la confianza institucional.

El resultado es un círculo complejo: el conflicto desalienta la inversión y el crecimiento regional, mientras la falta de oportunidades económicas contribuye a profundizar tensiones sociales. Romper ese ciclo será uno de los principales desafíos de política pública para el próximo gobierno.

La experiencia internacional muestra que estos escenarios no son irreversibles. Irlanda del Norte ofrece un ejemplo relevante. Tras décadas de violencia durante el conflicto conocido como The Troubles, el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 permitió

reducir drásticamente la violencia y abrir un ciclo de estabilidad. En las dos décadas posteriores, el PIB regional más que se duplicó y el ingreso per cápita prácticamente se duplicó.

La comparación no busca equiparar realidades distintas, pero sí recordar una lección clave: los territorios que logran superar conflictos persistentes lo hacen cuando el Estado articula seguridad, desarrollo económico y legitimidad institucional.

Por ello, el próximo gobierno debiera priorizar tres líneas estratégicas para La Araucanía: reactivar el desarrollo productivo regional, fortalecer la presencia institucional del Estado y promover espacios estables de diálogo político e intercultural. A ello debe sumarse una agenda sostenida de infraestructura y conectividad rural, condición básica para cerrar brechas territoriales.

El verdadero desafío será sostener una estrategia de desarrollo más allá de un período presidencial. Porque el problema de la región, en el fondo, nunca ha sido la falta de planes, sino la falta de continuidad para convertirlos en resultados.

✍